

Inconformidad con larga historia

(Patricia Dávila, pág. 6-10)

La Guardia Nacional (GN), el proyecto emblemático de seguridad con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pacificaría al país, tuvo un arranque accidentado: es la primera vez que policías federales en activo paralizan las principales vialidades de la Ciudad de México en demanda de certeza jurídica, económica y laboral dentro de la nueva corporación. De acuerdo con elementos desplegados en los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero, ellos no se niegan a pertenecer a la GN, pero sí a patrullar las calles y enfrentarse al crimen organizado sin contar con un oficio de comisión que cubra su seguro en caso de algún percance.

Los federales fueron evaluados por militares en cuarteles de la Ciudad de México. Quienes aprobaron el examen médico y el físico se consideraron aptos para integrarse en la nueva corporación; a los que se les detectó mayor índice de grasa corporal o algún tatuaje se les envió, sin consultarlos, al **Instituto Nacional de Migración (INM)**. A éstos se les dio a firmar un oficio en el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México momentos antes de abordar el avión que los trasladaría a Chiapas o Tijuana.

La voz de las mujeres

Tanto el presidente como su secretario de Seguridad insisten en que los agentes federales fueron movilizados por una “mano negra”. No obstante, de acuerdo con registros de este semanario, la movilización policiaca surgió en las redes sociales, en las cuentas “Esposas y novias de policías federales” y posteriormente “Verdaderas esposas de policías federales”, ambas de Facebook. Esas cuentas fueron creadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como un foro en el que las mujeres visibilizaron las arbitrariedades cometidas contra sus maridos en el desempeño de su labor. Ahí se quejaron por los incumplimientos del gobierno en el pago de salarios, bonos de operatividad, deficiencia de armamento, falta de comida, hospedaje y de gasolina para los vehículos.

Un agente, que ahora es parte del **INM** en Chiapas, narra: “Yo pertenecí a la División de Fuerzas Federales, al segundo agrupamiento. Fui a hacer el examen al Campo Militar número 1 pero no lo pasé por exceso en el Índice de Masa Muscular. La condición era de 29.800 y yo pasé con 32, por eso no fui apto para pertenecer a la Guardia Nacional, aunque el examen físico lo pasé sin problema”. Recuerda que un día antes del examen, en la base Contel, se

presentó un funcionario de recursos humanos de la PF: “Nos dijo que al día siguiente seríamos desplegados comisionados a Migración. Llegando al hangar de la Policía Federal ya nos esperaba gente de recursos humanos de la PF, nos dio un oficio de cambio de adscripción y otro oficio de que pasamos comisionados a **Migración**, y nos subieron al avión. Nos dejaron en Minatitlán, Veracruz. Nos recogieron los soldados y nos trasladaron a su base militar. Desde entonces estamos aquí, prácticamente abandonados, en el tercer batallón. Los militares pensaban que veníamos a realizar funciones de primer respondiente, que íbamos a trabajar con ellos en los operativos, pero no, tenemos una semana sin hacer nada.

ooo0ooo

Una peculiar “mano negra”

(Olga Aragón y Luis Cruz, pág. 8-10)

Tijuana, BC.-Ignacio Benavente Torres, fundador y dirigente de la asociación civil Pro Libertad y Derechos Humanos de América (PLDHA), en un instante cobró notoriedad al ser identificado por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la “mano negra” que presuntamente se halla detrás del movimiento de policías federales contra la Guardia Nacional. En conferencia de prensa el jueves 4, Durazo entregó a los periodistas una tarjeta con los antecedentes penales de Benavente: preso por secuestro en el Cefereso 03 de Matamoros. Durante el plantón de policías federales del miércoles 3, y sobre el secuestro del que fue acusado, Benavente dijo públicamente que en realidad se trató del levantamiento y desaparición de una persona en Tijuana en 1990, pero aseguró que él no fue responsable de esos delitos y que los verdaderos responsables le pedían 250 mil dólares para no involucrarlo.

ooo0ooo

La sucia contracara de la Policía Federal

(José Raúl, pág. 11- 15)

A finales de 2017 Alfonso Durazo, quien estaría llamado a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, le entregó a Andrés Manuel López Obrador un informe en el que detalló las debilidades institucionales de la Policía Federal (PF). Ahora, tres fichas de ese informe que logró consultar este semanario exhiben los argumentos que inclinaron al nuevo gobierno a la creación de la Guardia Nacional y la preferencia para hacerlo con integrantes de las Fuerzas Armadas, por sobre la PF. En la primera ficha, Durazo hizo hincapié en el bajo crecimiento de efectivos de las PF entre las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Su número real, en el sexenio pasado, se estancó en “40 mil elementos”, cuando fue adscrita a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

Antecedentes oscuros

El pasado 4 de junio Durazo sostuvo que existió corrupción en la PF en el proceso de adquisición de gasolinas y tecnología. En medio de las protestas por el traslado de policías a la Guardia Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana afirmó que detrás de la rebelión hubo “instigadores” y “oportunistas”. “Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la corporación, sino de los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios para la compra de gasolina, tecnología, entre otros”, indicó

Baja confianza

María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común y quien mantuvo cercanía con la PF durante la administración de Genaro García Luna por medio de la organización México Unido contra la Delincuencia, advierte que la presente administración federal tiene un diagnóstico errado sobre el cuerpo de seguridad federal y hacia dónde fijará su destino. “Yo no sé quién le dio ese diagnóstico al presidente, pero se lo dieron equivocado. Definitivamente la policía tiene insuficiencias, ha cometido errores y tiene policías buenos y malos. Yo creo que son más los buenos. A mí me parece que desde un principio el presidente tiene una mala percepción que no ha argumentado por qué”, señala en entrevista.

Derechos humanos vulnerados

Un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la PF estuvo implicada en al menos ocho recomendaciones por “violaciones graves”. El documento consigna la participación de la PF en las matanzas de Apatzingán, donde se demostró que policías federales intervinieron en la ejecución de 16 civiles desarmados; Toluca, donde la CNDH encontró indicios de ejecuciones a corta distancia y siembra de armas, y Nochistlán, donde los uniformados desalojaron a maestros y padres de familia en una acción que dejó seis ciudadanos muertos por arma de fuego.

Politización de la seguridad

“La Policía Federal no es la única dependencia que tiene o ha tenido corrupción; por ejemplo, la Presidencia de la República también ha tenido corrupción, pero nadie se ha planteado desaparecerla”, comenta a Proceso Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) e invitado permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública. A pesar de que comparte el diagnóstico de López Obrador sobre las causas estructurales de la violencia y el abandono paulatino de la PF, advierte que si continúan descuidándose la prevención y procuración de justicia, habrá problemas que no podrá resolver la Guardia Nacional.

Y la Guardia se estrenó con los más débiles

(Isaín Mandujano, Olga Aragón, Verónica Espinosa, Noé Zavaleta y Sara Pantoja. Redacción: Rodrigo Vera, pág. 12-13)

Tras el banderazo de salida que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a la Guardia Nacional el 30 de junio último, la nueva corporación de seguridad pública ya arrancó sus operaciones en varios estados. Su prioridad es, por lo pronto, la contención de los migrantes en las entidades fronterizas, causando las protestas de los activistas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Con una insignia negra colocada en su brazo izquierdo, sobre la cual están resalta-das en blanco las letras “GN”, los guardias nacionales siembran el pánico en las zonas de alta afluencia de migrantes, como terminales de autobuses, albergues, carreteras, hoteles y aeropuertos.

El miércoles 3 en el río Suchiate, Chiapas, se hizo la presentación formal del comandante de la Guardia Nacional para esa región de la frontera sur, el general brigadier Vicente Antonio Hernández Sánchez, quien a la vez es comandante de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula. Enfundado en el riguroso uniforme militar, Hernández Sánchez le informó a la prensa que se desplegarán 6 mil 500 elementos para vigilar esa línea fronteriza –de más de 900 kilómetros–, así como en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y el sur de Veracruz. Presumió que desde mayo pasado en esa frontera han sido “rescatados” 20 mil 400 migrantes de las manos de los traficantes, labor que ahora seguirá realizando la Guardia Nacional en coordinación con el **Instituto Nacional de Migración (INM)**. Agregó que últimamente fueron arrestados más de 30 polleros que también se dedicaban a la trata de personas.

Críticas

La visión del general contrasta con la de los activistas y defensores de los derechos humanos, como la del párroco de Huixtla y fundador del albergue para migrantes Hogar de la Misericordia, Heyman Vázquez: “Esta militarización de la frontera sur responde a una política migratoria inhumana, pues ahora está obligando a los migrantes a caminar por rutas de más alto riesgo, más peligrosas”, lamenta. Para Diana Damián, de la organización civil Formación y Capacitación, los operativos del gobierno representan una “militarización” que responde a las “presiones” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien obligó a López Obrador a bloquear los flujos migratorios valiéndose de la Guardia Nacional, la cual, dice, ni siquiera tiene un protocolo de actuación para tratar a los migrantes; sólo los capturan y los llevan a las estaciones migratorias que ya de por sí están sobresaturadas y con brotes de enfermedades infecciosas. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur es realmente una “movilización militar” que causa “miedo e incertidumbre entre los migrantes”, coinciden otros activistas de esa zona, como Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Claudia León, del Servicio Jesuita a Refugiados México; Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, y el abogado activista Luis Rey García. Este último, por cierto, encaró al general brigadier Hernández Sánchez cuando terminó su discurso en el río Suchiate, y le dijo: “Usted está encabezando la militarización en la frontera sur, que es violatoria de los derechos humanos”.

Piden visas humanitarias

En la frontera norte también comenzaron a llegar los agentes de la Guardia Nacional. Portando armas y uniforme castrenses, sólo se les distingue de los militares por su insignia negra en el brazo. Su presencia es muy visible en las zonas de mayor afluencia de migrantes: en las inmediaciones de los hoteles, terminales de autobuses, aeropuertos y albergues de Tijuana y Mexicali. Por ejemplo, una veintena de guardias nacionales ya se apostó permanentemente en el retén militar “El Centinela”, ubicado en el kilómetro 41 de la autopista Mexicali-Tijuana. Ahí –en la abrupta sierra de La Rumorosa– de-tienen autobuses de pasajeros, automóviles y camiones de carga. Les piden a los ocupantes que acrediten su nacionalidad mexicana o su estancia legal en el país.

Presencia en Guanajuato

En el violento estado de Guanajuato es paulatino el arribo de la Guardia Nacional. Hasta el jueves 4 ya operaba en Celaya, León, Irapuato, Salamanca y San Luis de la Paz. La nueva corporación de seguridad operará de manera directa en al menos 10 municipios guanajuatenses; cada uno de ellos recibirá, en promedio, a 120 elementos. Pero en otros casos, como en Celaya, están asignados 400 uniformados instalados provisionalmente donde había un destacamento de la Policía Militar.

Operativo en Iztapalapa

El jueves 4 la Guardia Nacional arrancó sus operaciones en la Ciudad de México, particularmente en Iztapalapa, donde los habitantes de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl fueron los primeros en observar el patrullaje de la nueva institución de seguridad pública. Los guardias nacionales iniciaron sus operativos de vigilancia vestidos con el característico uniforme del Ejército en una colonia que frecuentemente padece robos, homicidios y narcomenudeo.

ooo0ooo

Queja en Washington: no tenemos interlocutores en México

(J. Jesús Esquivel, pág. 16-17)

Washington.-Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostienen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desatiende la cooperación binacional en materia de combate al narcotráfico, lo que aprovechan dos cárteles mexicanos para extender su control territorial, y se muestran extrañados porque, dicen, pareciera que al mandatario no le interesa la cooperación con su vecino del norte. “Nuestros agentes asignados a México no tienen interlocutores para el intercambio de información de inteligencia sobre la lucha contra los cárteles; incluso nos han reportado que el nuevo presidente está deslindando a la Marina mexicana de la estrategia para confrontar a los cárteles”, explica uno de los funcionarios, quien, al igual que su colega, aceptó la entrevista bajo la condición del anonimato.

Extrañas coincidencias

Apoyados en informes de inteligencia y confidenciales recopilados por sus agencias federales en México, los funcionarios del Departamento de Justicia ven con pre-ocupación la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el aumento en el trasiego de heroína y metanfetamina de esta organización criminal y del Cártel de Sinaloa. “Pareciera que el gobierno mexicano no está interesado en contener el aumento de poder del CJNG o que desconoce lo que está ocurriendo en México con este poderoso grupo criminal. Por eso es esencial el inter-cambio de información de inteligencia y de estrategia (bilateral). Los narcos han aprovechado este hueco”, reitera a Proceso uno de los funcionarios.

Los logros de la Marina

Entre los logros que el gobierno de Trump y anteriores le reconocen a la Marina mexicana en el combate al narcotráfico destacan el desmantelamiento de las estructuras cupulares de organizaciones como Los Zetas, La Familia Michoacana y los cárteles del Golfo, de Tijuana y de Juárez. “La captura de Joaquín El Chapo Guzmán no se hubiera logrado sin la participación y cooperación con la Marina, y otros connotados golpes asestados al Cártel de Sinaloa. Insisto: la Marina de México es la más capacitada para enfrentar al narcotráfico; tiene armas, el equipo tecnológico y la estrategia de inteligencia necesaria para ello”, enfatiza uno de los entrevistados.

Lo que viene

Desde que Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, y a partir de su juicio y de la sentencia que recibirá en Brooklyn este año, agencias federales de este país, sobre todo la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), han dejado de hablar con el mismo énfasis sobre la lucha contra el Cártel de Sinaloa, la organización criminal que en los tiempos del Chapo fue considerada como la más poderosa. La falta de una campaña mediática por parte de Estados Unidos y la DEA contra el Cártel de Sinaloa –como la que llevó a cabo cuando El Chapo formaba parte de la cúpula de mando– genera suspicacias en el sentido de que existe un acuerdo con la fracción del Mayo Zambada.

ooo0ooo

La Guardia Nacional y la militarización de las fronteras-Ensayo (Oswaldo Zavala, *pág.*, 56-58)

El pasado 21 de junio, la fotoperiodista Hérika Martínez capturó en Ciudad Juárez una escena inconcebible en los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: soldados de la Guardia Nacional –el nuevo cuerpo de seguridad creado el 28 de febrero con el objetivo de desmilitarizar gradualmente el país– detenían a dos mujeres y a una niña que intentaban cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Según la agencia de noticias AFP, se trataba de una familia nicaragüense que fue separada al momento del cruce. Los hombres de la familia lograron atravesar la frontera, pero también fueron detenidos al norte del río. No se trataba de indocumentados entrando a México por la frontera sur, sino de migrantes intentando salir del país en la frontera norte. En la imagen, los efectivos de la Guardia Nacional igualaban las funciones propias de la Border Patrol estadounidense. En más de un modo, los militares mexicanos suplementaban de facto la política antinmigrante del presidente Donald Trump desde México. Operaban, en efecto, al servicio del gobierno de Estados Unidos. La actual instrumentalización de la Guardia Nacional para establecer un muro virtual en las fronteras mexicanas, tanto en el sur como en el norte, corre el riesgo de desarticular uno de los pilares del proyecto presidencial de López Obrador –la pacificación del país– y escalar hasta convertirse en la nueva “guerra” en nombre de la “seguridad nacional” de México y Estados Unidos. Propongo, en lo que sigue, analizar las terribles implicaciones que podría tener este nuevo conflicto militarizado en nuestro país.

Cuando comenzó a agravarse la crisis migratoria de centro-americanos que masivamente comenzaron a cruzar el país hacia la frontera norte en las llamadas “caravanas”, el gobierno de AMLO una vez más se mostró decidido a un cambio radical de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. El 17 de enero decidió abrir la frontera para los refugiados y agilizar los trámites para recibir a los migrantes indocumentados. Para principios de febrero, su gobierno ya había otorgado 12 mil 500 visas humanitarias en lo que fue considerado como un “gesto histórico”.

Pero en el panorama mexicano el acuerdo tiene un peso simbólico muy distinto: obligó al gobierno de AMLO a la aceptación pública de un nuevo conflicto de “seguridad nacional” que amerita el uso de su Guardia Nacional ya no para la pacificación del país, sino para echar a andar un continuo y violento mecanismo de militarización de las fronteras en contra de un flujo migrante que, siguiendo la crisis política, económica y ambiental de Centroamérica, lejos de agotarse, con toda certeza repuntará en los siguientes años. Entre 2014 y 2018, según un estudio hecho por especialistas de la Universidad de Texas en Austin, la migración de los países del llamado “triángulo norte” (El Salvador, Guatemala y Honduras) se incrementó y se estabilizó en alrededor de 300 mil refugiados que anualmente abandonan sus países para intentar migrar a Estados Unidos. Para 2019, sin embargo, se estima que esa cifra rebase los 700 mil refugiados.

La militarización de las fronteras mexicanas funciona, entonces, como una extensión directa de la hostilidad contra los migrantes en Estados Unidos, cuya frontera se ha externalizado más allá del río Bravo con el consentimiento explícito del gobierno de AMLO. En otras palabras, AMLO parece haber

emprendido el mismo camino de la guerra contra los migrantes que definió al gobierno de Donald Trump desde su inicio en 2016. Es significativo, en este sentido, que el 14 de junio, una semana después del acuerdo migratorio, haya renunciado a su puesto **el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López**, quien había defendido el “derecho humano a migrar”. En su lugar, el presidente López Obrador nombró a Francisco Garduño Yáñez, cuya experiencia como funcionario de la extinta Procuraduría General de la República y como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México “concretan el endurecimiento de la estrategia del gobierno federal para frenar la migración y cumplir su compromiso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”

Ante la nueva militarización de México, quizá estemos presenciando el principio de una nueva guerra ajena a nuestros intereses nacionales, pero también ajena al derecho internacional y a la dignidad y solidaridad humana. El presidente López Obrador, me parece, se encuentra ante una encrucijada que podría definir irreversiblemente el curso de su mandato al igual que la lucha anticomunista y la supuesta “guerra contra el narco” afectaron a los gobiernos de las últimas cinco décadas. La sangrienta historia de la agenda de seguridad nacional estadounidense en nuestro país ya ha demostrado su profundo desprecio al estado de derecho y a la vida humana. El gobierno que busca trascender como la “cuarta transformación” de nuestra historia como nación soberana no puede permitir que los intereses más ilegítimos de la geopolítica estadounidense nos obliguen, una vez más, a tomar las armas contra nosotros mismos.

ooo0ooo